

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021)**

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por ROCIO CARMONA SALAZAR en contra de COLPENSIONES (Radicado 05001-31-05-019-2019-00127-01). Se aclara que en un primer momento, el expediente fue repartido al despacho de la Magistrada Nancy Gutiérrez Salazar, pero en vista de que su ponencia no fue acogida por la mayoría, pasó el proceso al suscrito para su sustanciación.

**ANTECEDENTES**

Depreca la demandante se condene a la pasiva a reliquidar su pensión de vejez con base en el IBL real, e incluyendo la totalidad de todas las semanas, retroactivamente a partir del 1º de enero de 2012; los intereses de mora desde el vencimiento del plazo legal con el que se contaba para el otorgamiento de la prestación; la indexación y las costas (fl 1).

Lo anterior, lo sustentó así: Nació el 26 de julio de 1955; al 1º de abril de 1994 contaba con 39 años de edad y más de 15 años cotizados al otrora ISS; solicitó la pensión de vejez, y a través de la Resolución 009327 del 17

de abril de 2012, le fue concedida a partir del 1º de enero de esa anualidad, en cuantía inicial de \$1.411.421, con un ingreso base de liquidación de \$2.138.517 y una tasa de retorno del 66%; la pasiva solo le reconoció 895 semanas cotizadas, cuando entre tiempo público y privado alcanza más de 1.250; la pensión reconocida solo le fue pagada con la Resolución GNR 249230 del 24 de agosto de 2016, por lo que para su pago se excedió el plazo de 4 meses, contado a partir de la reclamación; el 18 de octubre de 2017, reclamó a Colpensiones lo aquí debatido, sin obtener respuesta alguna (fls 1-2).

COLPENSIONES aceptó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la accionante, sobre los demás hechos señaló que deben ser acreditados. Se opuso a las pretensiones, proponiendo las excepciones de: inexistencia de la obligación e inexistencia de la obligación de reconocer intereses de mora, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación (fls.57-66).

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín (Ant.), en sentencia del 25 de julio de 2019, haciendo uso del criterio expuesto en la SU 769 de 2014, sumó los tiempos públicos y privados trabajados por la promotora, encontrando un mayor valor de la mesada pensional, por aumento del IBL y de la tasa de reemplazo. Por lo tanto, condenó a Colpensiones a pagar a la demandante: i) \$2.156.819 por retroactivo del reajuste causado entre el 1º de enero de 2012 y el 30 de junio de 2019, a partir del 1º de julio de ese año dispuso una mesada de \$1.876.658. Sobre este retroactivo ordenó la indexación; ii) los intereses de mora, liquidándolos entre el 17 de abril de 2012 y el 30 de septiembre de 2016, en \$62.145.659; y iii) las costas del proceso, fijando las agencias en derecho en el 15% de las condenas, más un SMLMV (fl 102).

La convocada a juicio aspira a que se revoque tal determinación, en su sentir, la interpretación expuesta en la sentencia de unificación utilizada por la *a quo*, solo cobija los casos en que se solicita la pensión de vejez, más no

su reliquidación, por lo tanto la absolución era lo que se imponía en este caso.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

Previo a lo que corresponde, importa resaltar que en esta instancia, se encuentran por fuera de discusión, los siguientes presupuestos fácticos: /) La demandante nació el 26 de julio de 1955 (fl 8); //) a través de empleadores privados, fue afiliada del extinto ISS a partir del 3 de marzo de 1976, y cuenta con tiempos de servicio público, en algunos lapsos cotizados al fondo de pensiones, para entre unos y otros alcanzar hasta el 31 de diciembre de 2011, 959,71 semanas, descontando los periodos simultáneos entre mayo de 2009 y diciembre de 2011 (fls 68 a 79); ///) En la Resolución 009327 del 17 de abril de 2012, el entonces Seguro Social, le reconoció la pensión de vejez en aplicación del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición, a partir del 1º de enero de 2012, indicándole que sería incluida en nómina de mayo pagadera en junio de esa calenda; con un IBL de \$2.138.517, que al aplicar una tasa de reemplazo del 66%, por 895 semanas de cotización, sin tener en cuenta el tiempo público, arrojó una mesada inicial de \$1.411.421 (fl 9); /V) Esa prestación solo le fue cancelada en nómina de septiembre de 2016, pagadera en octubre de ese año, habiendo interpuesto un proceso ejecutivo laboral, por medio de la Resolución GNR 249230 del 24 de agosto de 2016 (fls 13 a 20); V) El 18 de octubre de 2017, reclamó a Colpensiones, la reliquidación de su mesada pensional y los intereses de mora, pero no obtuvo respuesta (fl 21).

Con la claridad que brindan los anteriores elementos, corresponde a la Sala dilucidar, si procede o no la reliquidación de la mesada pensional de la demandante, lo que dependerá de si es posible o no, en el marco del

Decreto 758 de 1990, sumar los tiempos privados con tiempos públicos cotizados o no al entonces Instituto de los Seguros Sociales. Igualmente, por el grado jurisdiccional de Consulta que se surte en favor de Colpensiones, se determinará si hay lugar a la indexación, si proceden los intereses de mora sobre el retroactivo pagado en septiembre de 2016, y si la demandada debe asumir o no las costas de la primera instancia.

Pues bien, el artículo 36 de la Ley 100, consagró la denominada *transición*, según la cual, cumplidas ciertas condiciones, sus beneficiarios acceden al derecho pensional, bajo las normas del régimen al que venían afiliados, en tres tópicos: edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto (entendido como tasa de reemplazo o retorno).

Entre las normas anteriores a la Ley 100, se encuentra las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y el Decreto 758 de 1990. En los dos primeros reglamentos, tienen un papel importante los tiempos de servicio en el sector público; en la Ley 33, con dos décadas de estos, se logra la prestación; al paso que en la Ley 71, su cómputo con semanas cotizadas, permiten acceder a la subvención por vejez, al completar entre unas y otras, 20 años. Esto, no ocurría con quienes aspiraban a la aplicación ultractiva del Decreto 758, toda vez que la jurisprudencia nacional, interpretaba el artículo 12 de ese compendio, en el sentido que para lograr la pensión bajo los lineamientos de ese estatuto, solo era posible tener en cuenta los tiempos efectivamente cotizados al extinto ISS. A guisa ilustrativa pueden consultarse las sentencias SL16104 de 2014, SL 16086 de 2015, y SL16810 de 2016.

Dicho panorama se fue transformando a partir de las sentencias T-090 y T-398, ambas de 2009, en las que la Corte Constitucional interpretó el referido artículo, en el entendido que su tenor literal, no impide incluir para la causación de la pensión de vejez, los tiempos públicos cotizados o no al ISS. Aunado a que el régimen de transición, solo previó la aplicación de las normas anteriores en los tres elementos ya vistos, ninguno de los cuales

hace alusión a los tiempos (públicos o privados) que se incluyen o no para la consolidación del derecho pensional, por lo que para resolver ese aspecto, debe acudirse al literal f del artículo 13 de la Ley 100, que posibilita sumar períodos de labor en los sectores públicos y privados.

Hermenéutica a todas luces favorable, que tomó más fuerza cuando se profirieron las providencias de unificación SU 769 de 2014 y SU 057 de 2018. En ambas, el máximo intérprete de la Carta Política, reiteró que la intelección explicada, es la que debe aplicarse cuando se cuestione la posibilidad de la sumatoria en comento para las pensiones del Decreto 758, por ser la que en mejor proporción garantiza el efectivo goce de derechos fundamentales de alto raigambre, como la seguridad social.

Estas últimas decisiones, versaron sobre asuntos en que solo mediante la sumatoria planteada, los accionantes adquirirían la pensión de vejez, por esa razón, este cuerpo colegiado era del criterio que únicamente, cuando se estuviera en ese escenario, era posible acumular en el estatuto del seguro social, los periodos servidos en el sector público, lo que excluía los casos de reliquidación o reajuste.

Criterio que fue recogido por la Sala mayoritaria, para en su lugar, como lo hacían otras salas de decisión del Tribunal, predicar que aun cuando se depreque el reajuste o reliquidación, es posible la sumatoria plurimentada en el Decreto 758, dado que a voces del artículo 4 de la Ley 169 de 1896, el órgano de cierre de esta jurisdicción ha proferido tres decisiones uniformes sobre un mismo punto de derecho. En efecto, en las sentencias SL1947, SL1981 y SL2557, todas de 2020, la Sala de Casación Laboral de la Corte, abandonó la tesis que impedía la suma de tiempos públicos y privados en ese decreto, y adoctrinó que esto sí era posible, ya que, el régimen de transición no cobijó la forma de computar las semanas para lograr la pensión de vejez, por lo tanto ha de aplicarse la posibilidad que en ese sentido otorga el literal f del artículo 13 de la Ley 100.

Esa interpretación del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, irradia entonces no solo los procesos en los que se ruega la pensión de vejez, sino también su reliquidación, en la medida que como lo señaló el alto tribunal, en la última de las providencias enlistadas: *“...conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento. De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez...”*.

Y es que para esta Sala, contrario a lo sostenido en la censura, en ambos casos -cuando se solicita la pensión de vejez o su reliquidación-, se cuestiona la exegesis correcta del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, y siendo que las altas cortes se encuentran de acuerdo en la posibilidad de sumar tiempos públicos y privados en ese precepto, no existe razón jurídica o fáctica para dejar a un de lado tal discernimiento en los casos de reajuste pensional.

En consecuencia, debe confirmarse este aspecto de la sentencia apelada, pues en el marco del Decreto 758 de 1990, es jurídicamente posible sumar tiempos públicos y privados, por lo que procede la reliquidación deprecada. Revisada la liquidación efectuada, visible a folio 98, debe decirse que la misma se ajusta a derecho, toda vez que además de tener en cuenta el IBL más favorable (últimos diez años, hecho por fuera de discusión), se incluyeron los salarios tanto del sector público y privado condensados en la historia laboral del folio 68, excluyendo los periodos simultáneos, arrojando un total de 959,71 semanas, que equivalen a una tasa de retorno del 72% (artículo 20 del Decreto 758). Lo que significa que para 2012, la mesada correcta era de \$1.429.636, y no de \$1.411.421.

En igual norte, se confirmará la condena al pago del retroactivo causado por el reajuste, porque se liquidó en forma correcta, actualizando año a año el

monto, y computando para el efecto 14 pagos anuales, en la medida que, siguiendo los presupuestos del Acto Legislativo 01 de 2005, la mesada es inferior a tres salarios mínimos de 2012, y la accionante causó el derecho antes del 31 de julio de 2011, arribó a la edad mínima el 26 de julio de 2010, y en las dos décadas antepuestas, entre tiempo público y privado, logró más de 500 semanas cotizadas.

Sobre las sumas ordenadas por este concepto, es factible la indexación, como se dispuso, al ser un mecanismo que garantiza que la demandante reciba lo que se le adeuda en su justo valor. Lo que sí debe adicionarse, es la autorización a Colpensiones para que del retroactivo causado por los reajustes, descuenta los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud, en razón de las normas vigentes que regulan esa materia (artículos 157 y 203 de la Ley 100 de 1993 y 26 del Decreto 806 de 1998).

Pasando a los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100, reclamados respecto del retroactivo causado entre el 1º de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2016, pagado en octubre de esa última calenda en la resolución del folio 13, es claro que sí la pensión fue reconocida desde el 17 de abril de 2012, habiéndose iniciado su disfrute desde el 1º de enero de ese año, al momento de su cancelación, ya habían transcurrido más de los 4 meses de plazo a que alude el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. No se conoce la fecha de la reclamación inicial, como bien señaló la falladora de conocimiento, sin embargo, lo razonable para la Sala era tener en cuenta la fecha en que la entidad se obligó al pago de la mesada, porque desde ese momento incurrió en mora. Así las cosas, como en la Resolución del folio 9, se dispuso el pago en la nómina de mayo de 2012, a pagarse en junio de igual anualidad, procede la moratoria desde el 1º de junio de 2012 y hasta el 30 de septiembre de 2016, día anterior a la satisfacción total de la obligación.

Efectuados los cálculos de rigor, los intereses de mora adeudados suman \$48.147.080, en ese sentido se modificará lo propio de la sentencia que en este aspecto se revisa en Consulta.

Es importante resaltar, que ninguno de los emolumentos a los que se condenó, se afectó por la prescripción, ya que, siguiendo lo preceptuado en el artículo 151 del CPT y de la SS, entre el 24 de agosto de 2016, cuando se expidió la resolución mediante la cual se pagó la pensión de vejez (fl 18), la reclamación del reajuste y los intereses de mora, el 18 de octubre de 2017 (fl 21), y la presentación de la demanda, el 7 de marzo de 2018 (fl 6), no transcurrió el lapso trienal del fenómeno extintivo.

Finalmente, las costas de primera instancia deberá asumirlas Colpensiones, por ser una condena que se asigna ante el criterio objetivo previsto en la ley, según el cual, estas deben imponerse a la parte que resulta vencida en juicio. Las costas de segunda instancia, igualmente serán a cargo de la pasiva, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación. Se fijan como agencias en derecho un SMLMV.

### DECISIÓN:

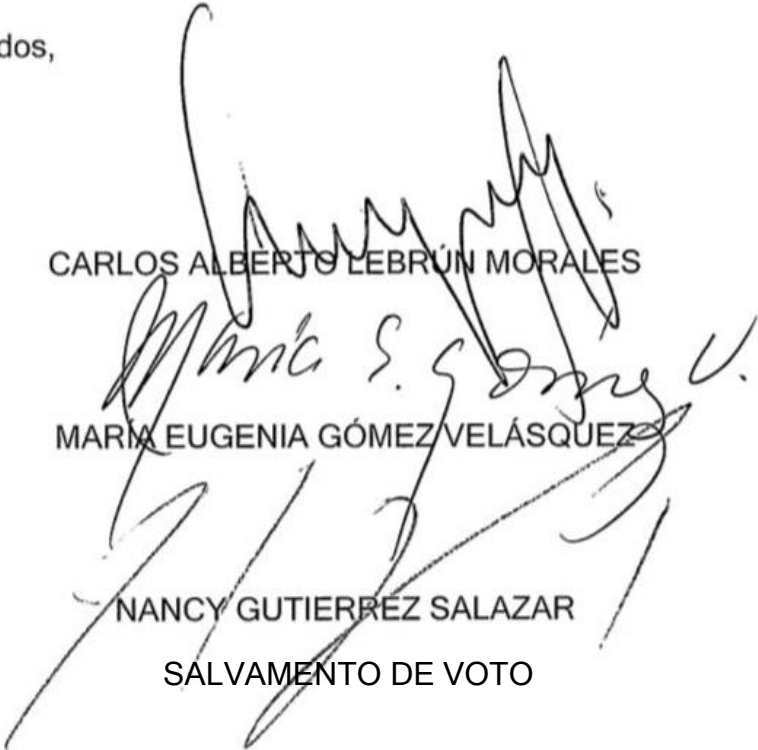
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **ADICIONA** la sentencia materia de apelación y consulta, para autorizar a **COLPENSIONES** el descuento de los aportes en salud, del retroactivo generado por concepto de reajuste pensional; la **MODIFICA** en cuanto al monto de la condena por los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la cual asciende a \$48.147.080, conforme a lo expuesto en la parte considerativa; y la **CONFIRMA** en lo demás.



Costas en ambas instancias a cargo de COLPENSIONES. Se fijan como agencias en derecho en esta instancia un SMLMV.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

SALVAMENTO DE VOTO

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 06 fijados el 19 de enero de 2021  
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

\_\_\_\_\_  
El secretario



### **SALVAMENTO DE VOTO**

**DEMANDANTE: ROCIO CARMONA SALAZAR**

**DEMANDADO: COLPENSIONES**

**Radicado: Radicado 05001-31-05-019-2019-00127-01.**

En el Proceso de la referencia, de manera respetuosa procedo a hacer Salvamento de Voto respecto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, consistente en acceder a Reliquidar la mesada pensional de la actora en aplicación del Decreto 758 de 1990, sumando para el efecto tiempo público sin cotización con tiempo cotizado.

Lo anterior en razón a que si bien La Sala de Casación Laboral de la Corte S. de J. haciendo un cambio de criterio, en tres (03) decisiones uniformes proferidas entre los años 2019 y 2020 adoptó la postura consistente en hacer viable la referida sumatoria en aplicación del Decreto 758 de 1990, lo hizo dentro del marco de la pensión de vejez propiamente dicha, pero no ha ocurrido lo mismo tratándose de reliquidación de pensión de vejez concedida de manera precedente con otra normatividad, en cuyo escenario todavía no se han proferido las tres (03) decisiones uniformes por parte de La Sala titular de dicha Corporación que constituyan Doctrina Legal Probable; y por tanto, dado que no se trata de los mismos supuestos fácticos, no es posible hacer extensivo el primer precedente a la segunda hipótesis; por lo que considero necesario esperar a que se consolide dicho precedente tratándose de Reliquidación pensional, máxime que se trata de un cambio de criterio

La Magistrada,



**NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**